

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

20283 *ORDEN de 11 de julio de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada con fecha 31 de julio de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 25.826, interpuesto por «Casino de Taoro, Sociedad Anónima», por la tasa de juegos de suerte, envite o azar, con cuantía de 9.616.750 pesetas.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 31 de julio de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso número 25.826, interpuesto por «Casino de Taoro, Sociedad Anónima», representado por el Procurador señor Estévez Rodríguez, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 10 de julio de 1985, por la tasa de juegos de suerte, envite o azar, con cuantía de 9.616.750 pesetas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Estévez Rodríguez, en nombre y representación de «Casino de Taoro, Sociedad Anónima», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de julio de 1985, a que la demanda se contrae, declaramos no ser en parte conforme a derecho, y, por consiguiente, la anulamos en cuanto la misma confirma el fallo del TEAP de 26 de abril de 1983, que ordena debe incluirse en la base imponible de la tasa las cantidades ingresadas por la entrada en las Salas reservadas para el juego, procediendo, que por el señor Delegado de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife se ordene, en vía de gestión tributaria, la comprobación administrativa pertinente, produciendo la liquidación definitiva que corresponda sin incluir el precio de las entradas en las salas de juego, la cual deberá ser notificada reglamentariamente al recurrente, devolviendo, en su caso, a los mismos lo que hubieren ingresado indebidamente al hacer su autoliquidación; sin hacer expresa condena en costas.»

Madrid, 11 de julio de 1989.-P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

20284 *ORDEN de 11 de julio de 1989 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Aznar Chagoyen, Sociedad Anónima Laboral.»*

Vista la instancia formulada por el representante de «Aznar Chagoyen, Sociedad Anónima Laboral», con código de identificación fiscal A-50317692, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales, en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 5.938 de inscripción.

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas, se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación para las que se devenguen por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto de actos jurídicos documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución, y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.º del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.-Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral, con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 11 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

20285 *ORDEN de 13 de julio de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 2.646/1985, interpuesto por don Vicente Ferrer Bonafont.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación número 2.646/1985, interpuesto por don Vicente Ferrer Bonafont, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 11 de octubre de 1985, que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 23.974, interpuesto por don Vicente Ferrer Bonafont, contra resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 19 de noviembre de 1982, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra Orden de fecha 26 de julio de 1982 por la que se le impuso una sanción de 250.001 pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 22 de julio de 1988, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don Vicente Ferrer Bonafont y revocando la sentencia apelada dictada, el 11 de octubre de 1985, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, debemos declarar y declaramos no ajustadas al ordenamiento jurídico las resoluciones del Ministerio de Hacienda de 26 de julio y 19 de noviembre de 1982, esta última resolutoria del recurso de reposición, que imponían al recurrente una multa de 250.001 pesetas como responsable de una falta prevista en el anulado Reglamento de 10 de abril de 1980, y en consecuencia anulamos tales resoluciones impugnadas; todo ello sin expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

20286 *ORDEN de 14 de julio de 1989 por la que se acuerda la ejecución, en sus propios términos, de la sentencia dictada en 27 de mayo de 1988, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirmando en apelación otra de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excelentísima Audiencia Nacional, de fecha 26 de septiembre de 1986, recaídas ambas en el recurso contencioso-administrativo número 24.444, interpuesto por el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra (Burgos), contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de junio de 1983, sobre Contribución Territorial, Rústica y Pecuaria.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 27 de mayo de 1988, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirmando en apelación otra de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Nacional, de fecha 26 de septiembre de 1986, recaídas ambas en el recurso contencioso-administrativo número 24.444, interpuesto por el Ayuntamiento de Quintanar

de la Sierra (Burgos), contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de junio de 1983, sobre Contribución Territorial Rústica y Pecuaria (cuota proporcional);

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Letrado del Estado contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de septiembre de 1986, recaída en el recurso 24.444, confirmando la misma; sin hacer expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de julio de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

20287 *ORDEN de 14 de julio de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 1.306/1985, interpuesto por la Administración del Estado.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación número 1.306/1985, interpuesto por la Administración General del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 8 de noviembre de 1984, que estimó el recurso contencioso-administrativo número 23.230, interpuesto por don Paciano González Pertejo, contra resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de abril de 1982, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra acuerdos de este Centro de fechas 25 de abril de 1979 y 24 de julio de 1981 por los que se denegó el traslado de la E. de S. número 15.661, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 23 de noviembre de 1988, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación promovido por el señor Letrado del Estado en la representación que le es propia, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 1984, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Nacional en el recurso jurisdiccional a que este rollo se contrae, en el que intervino como parte demandada en su representación acreditado don Paciano González Pertejo, confirmamos el fallo de la expresada resolución; sin hacer expresa imposición de las costas causadas en el presente recurso.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de julio de 1989.-P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPESA.

20288 *ORDEN de 14 de julio de 1989 por la que se acuerda la ejecución, en sus propios términos, de la sentencia dictada en 3 de octubre de 1987, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excelentísima Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 25.912, interpuesto por «Galerías Preciados, Sociedad Anónima», de Alicante, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de octubre de 1985, sobre Contribución Territorial Urbana.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 3 de octubre de 1987, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Excelentísima Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 25.912, interpuesto por «Galerías Preciados, Sociedad Anónima», de Alicante, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de octubre de 1985, sobre Contribución Territorial Urbana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Tinaquero Herrero, en nombre y representación de «Galerías Preciados, Sociedad Anónima», contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 4 de octubre de 1985, declaramos, que la resolución impugnada es conforme a Derecho; sin hacer expresa condena en costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 14 de julio de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

20289 *ORDEN de 17 de julio de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 22 de diciembre de 1987 en recurso contencioso-administrativo número 26.359, interpuesto por la Entidad «Entrecañales y Távora, Sociedad Anónima», contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 9 de octubre de 1985, en relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 22 de diciembre de 1987 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda- de la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo número 26.359, interpuesto por la Entidad «Entrecañales y Távora, Sociedad Anónima», contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de 9 de octubre de 1985, desestimatorias en parte de las reclamaciones interpuestas contra las liquidaciones y retenciones efectuadas por el INSERSO, por el concepto de Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que estimando el actual recurso contencioso-administrativo, interpuesto por el Procurador señor Pozas Granero, en nombre y representación de la Entidad demandante «Entrecañales y Távora, Sociedad Anónima», frente a la demandada Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra los actos del Instituto Nacional de Seguros Sociales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, a las que la demanda se contrae, debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho, y por consiguiente anulamos y revocamos los referidos actos administrativos y económico-administrativos al presente impugnados, declarando en su lugar el derecho de la Entidad demandante a que le sea devuelta, por la Administración demandada, la suma de 691.720 pesetas indebidamente retenidas por ésta, por el concepto de Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, de actual referencia, más el interés legal de dicha suma, a partir de la fecha en que la expresada retención se produjo, hasta su efectivo pago en la cuantía expresada en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia; todo ello sin hacer expresa declaración de condena en costas respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 17 de julio de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

20290 *ORDEN de 17 de julio de 1989 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en 15 de octubre de 1988, en recurso contencioso-administrativo número 27.608, interpuesto por «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima, y Cobra, Sociedad Anónima, Empresarios Agrupados», contra las Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central de fechas 11 de septiembre la primera, dos de 15 de enero de 1986, otra de 5 de febrero de 1986 y cuatro de 17 de marzo de 1986, en relación con el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas.*

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 15 de octubre de 1988 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en recurso número 27.608, interpuesto por las Entidades «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima, y Cobra, Sociedad Anónima, Empresarios Agrupados», contra ocho acuerdos del Tribunal Económico Administrativo Central de fechas 11 de septiembre el primero, dos de 15 de enero de 1986, otro de 5 de febrero de 1986 y cuatro de 17 de marzo